

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO  
ORAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C. quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	11001333502920220031500
CONVOCANTE	NINI SAYURY CRUZ TOLOSA
CONVOCADO	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
ASUNTO	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

OBJETO

Ocupa al Despacho el estudio de la conciliación extrajudicial de la referencia, a fin de determinar si es competente para conocer del asunto, y de ser así, establecer si debe aprobar o improbar dicho acuerdo conciliatorio.

CUESTIÓN PREVIA

Los señores **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA; DANIEL HERNANDO BARRAGÁN CASTRO** y **ÁLVARO ALEXANDER YEPES MEDINA**, actuando por intermedio de apoderado, presentan solicitud de aprobación de la conciliación extrajudicial a que llegaron con la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**. Sin embargo, al revisar la documentación que para el efecto se allega, se observa que se configura una indebida acumulación de pretensiones, que impide dar trámite a la solicitud en la forma en que se presenta, por las razones que a continuación se exponen.

El artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo referente a la acumulación de pretensiones en los siguientes términos:

“**Art. 165.-** En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la jurisdicción contenciosa administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la Caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento".

Mientras que, el artículo 88 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA., establece:

**"(...) ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.** El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.
  2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
  3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
- En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre

la presentación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

**También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:**

**a) Cuando provengan de la misma causa.**

**b) Cuando versen sobre el mismo objeto.**

**c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.**

**d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.**

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado. (...)” (Negrilla del Despacho)

De la lectura de la norma transcrita es evidente que, para que prospere la acumulación de pretensiones, deben reunirse los requisitos allí señalados, pero en ningún caso se menciona que puedan acumularse pretensiones de diferentes demandantes que no tienen relación entre sí, como en el presente asunto. Así entonces, sobre el tema en específico de la indebida acumulación de pretensiones, el H. Consejo de Estado ha indicado:

“En la demanda se pide la nulidad de actos generales y de actos particulares, mediante los cuales el Municipio de Cali, reestructuró la planta de personal de esa Contraloría y en consecuencia, suprimió el cargo de los 32 demandantes, que no 31 como erradamente lo expresa el Tribunal en su providencia. Como restablecimiento del derecho, piden el reintegro, el pago de salarios y prestaciones debidos desde el momento del retiro.

El Tribunal rechazó la demanda por indebida acumulación de pretensiones, ya que ella no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 82 del C. de P.C. En efecto, esta Sala comparte el criterio del a quo, como quiera que **no hay unidad de causa, ni identidad de objeto y el restablecimiento del derecho para cada uno de los 32 demandantes se presenta de manera diferente**, teniendo en cuenta primero, el día de ingreso y que la desvinculación del servicio se produjo en fechas diferentes, porque algunos de los oficios de comunicación de la supresión, ni siquiera tienen constancia del día en que fue realizada.

Así las cosas, las pretensiones de todos los demandantes no se pueden servir de las mismas pruebas.<sup>1</sup>” (Negrillas del Despacho)

En otra oportunidad indicó:

“Dispone el inciso 3º del artículo 82 del C. de P.C., que pueden formularse en una misma demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que éstas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas.

Como puede observarse, aun cuando se trata del mismo acto administrativo, éste produce efectos individuales para cada uno de los actores, por lo que no puede decirse que sus pretensiones tengan una causa común; tampoco existe dependencia entre las pretensiones de uno y otro demandante, ni las pruebas son comunes, pues en cada caso deberá probarse los vicios que se endilgan al acto y las circunstancias del restablecimiento del derecho pretendido que son particulares y específicas sin relación alguna entre sí.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto de 8 de mayo de 2003, expediente No. 76001-23-31-000-2001- 4522-01(4036-02), C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Asimismo, el vínculo que une a cada uno de los peticionarios con la administración es particular y concreto; los servicios prestados por cada cual son personales y generan derechos individuales; y el hecho de que se invoquen como vulneradas unas mismas normas, no significa que exista unidad de causa, pues la causa de la pretensión la integran los hechos constitutivos (no accesorios, circunstanciales o complementarios) de la relación sustancial debatida.

Pero además, existen pretensiones económicas que en el evento de prosperar tienen connotación diferente para cada uno de los peticionarios, dependiendo del salario, tiempo de servicios y demás circunstancias que se toman en consideración bajo un régimen normativo específico, lo que no deja duda acerca de que el objeto de las demandas no es el mismo y que hay imposibilidad legal de acumular las pretensiones dentro de un mismo proceso.

No queda duda entonces que no se dan los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código de procedimiento Civil, que permitan estudiar bajo una misma cuerda las pretensiones acumuladas.

En consecuencia, estima la sala que cada uno de los demandantes debió promover por separado su respectiva acción, para obtener el restablecimiento particular y concreto, pues al hacerlo en una misma demanda se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, defecto de fondo que no es susceptible de ser subsanado.<sup>2</sup>

Es así como, de acuerdo a lo considerado por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso puede determinarse que, siendo el vínculo de cada convocante con la administración particular y concreto, que los servicios prestados por cada uno de ellos es personal y genera derechos individuales, que la

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto de 18 de octubre de 2007, expediente No. 13001-23-31-000- 2004-00979-01(7865-05), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

identidad de normas vulneradas no implica la existencia de unidad de causa, y que las pretensiones de orden económico tienen una connotación diferente para cada convocante, no puede tramitarse la pluricidad de solicitudes que bajo un mismo expediente.

No obstante, la garantía fundamental del acceso a la administración de justicia que le asiste a los convocantes exige que el Despacho tome los correctivos necesarios para dar el trámite correspondiente a cada situación particular.

Por consiguiente, el Juzgado continuará con el análisis de la solicitud de aprobación de conciliación en lo relacionado con la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**, y ordenará el desglose de todas las piezas procesales relativas a los señores **DANIEL HERNANDO BARRAGÁN CASTRO** y **ÁLVARO ALEXANDER YEPES MEDINA**; documentos con los cuales el apoderado interesado deberá conformar nuevas solicitudes que, en todo caso, mantendrán como fecha de presentación el día **30 de agosto de 2022**, según consta en el acta de reparto y tendrán un número de consecutivo propio otorgado por la Oficina de Apoyo Judicial.

En el evento de encontrarse documentos que resulten trascendentes para uno y otro caso al mismo tiempo, la Secretaría expedirá copia auténtica de dichas actuaciones y de la presente providencia, a costa de la parte interesada.

El apoderado de la parte actora deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en esta providencia.

En consecuencia, procede el Despacho a estudiar lo pertinente frente al acuerdo conciliatorio de la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**.

### **ANTECEDENTES**

Obran como pruebas que fundamentan la conciliación extrajudicial, las siguientes:

1. Solicitud presentada el 23 de mayo de 2022, por la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA** mediante escrito **radicado 2022-01-455574** ante el **SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES**, por medio de la cual solicita el **RECONOCIMIENTO** y **PAGO** de las sumas de dinero correspondientes a las

diferencias generadas al haber omitido la contabilización de la **RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO** en la liquidación de la **PRIMA DE ACTIVIDAD**, la **BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN y VIÁTICOS** y todas aquellas a cargo de esa entidad que no incorporan dicho factor de la asignación básica, peticionando también que dicha suma sea indexada y pagada con los respectivos intereses.

2. Oficio **2022-01-490849 del 02 de junio de 2022**, por medio del cual se da respuesta a la anterior petición suscrito por el **COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO** de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**.
3. Solicitud conjunta de Conciliación Extrajudicial, radicada por **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA; DANIEL HERNANDO BARRAGÁN CASTRO TOLOSA y ÁLVARO ALEXANDER YEPES MEDINA** ante la Procuraduría General de la Nación, con sus respectivos anexos y poder, el 15 de julio de 2022, mediante escrito de radicación 19256097.
4. Acuerdo conciliatorio suscrito por la Procuradora 195 Judicial I para Asuntos Administrativos y los apoderados de las partes.
5. Certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, en la cual consta la intención de conciliar de esta entidad pública con los tres convocantes, incluida la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**.
6. Liquidación del acuerdo conciliatorio entre la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** y la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**.
7. Acta de **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** llevada a cabo ante **PROCURADURÍA 195 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** el 29 de agosto de 2022 celebrada entre la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** y entre otros, la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**, quien, a través de su apoderado judicial llegó con esa entidad al acuerdo conciliatorio que ocupa la atención del Despacho.

8. Oficio remitido de la conciliación celebrada entre las partes, junto con todos sus anexos a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.

### III. EL ACUERDO CONCILIATORIO

De conformidad con la precitada acta, una vez instalada la diligencia, se le concede el uso de la palabra al apoderado de las tres personas convocantes, incluida la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**; quien manifestó lo siguiente: “Comedidamente manifiesto al despacho que me ratifico en las pretensiones y aspectos a conciliar señalados en la solicitud de conciliación, los cuales se resumen en los siguientes: **EN RELACIÓN CON NINI SAYURY CRUZ TOLOSA: PRIMERA:** Se concilien los efectos contenidos y decididos dentro del oficio con radicado 2022-01-490849, acto administrativo de fecha 2 de junio de 2022. **SEGUNDA:** Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se cancele a su favor la suma de **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$3.033.869)**, por la reliquidación de los conceptos de prima de actividad, bonificación por recreación, viáticos y los reajustes de los anteriores conceptos, con la inclusión del porcentaje correspondiente a la reserva especial del ahorro, por el periodo de tiempo señalado en la certificación emitida por el Coordinador Grupo de Administración de Personal de la Superintendencia de Sociedades, que se adjunta a la presente solicitud”

Así mismo, se le concedió el uso de la palabra a la apoderada de la entidad convocada, en orden a que informara la decisión adoptada por el Comité de Conciliación, respuesta de dicho órgano corporativo que en la diligencia de conciliación se advirtió, fue incorporada en copia digital de manera previa a la celebración de la audiencia y que el señor Procurador dispuso transcribir en el acta en su integridad, habida cuenta de la existencia de propuesta conciliatoria, en los siguientes términos: “De conformidad con certificaciones expedidas el 9 de agosto de 2022 por la Secretaría Técnica, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades, en reunión celebrada el día 29 de julio de 2022 (acta No. 14-2022), estudió el caso de cada uno de los convocantes y decidió de manera unánime conciliar sus pretensiones (reserva especial del ahorro); la fórmula de conciliación es bajo los siguientes parámetros: **1. Valor: a) Nini Sayury Cruz Toloza (CC 52.881.200):** Reconocer la suma de \$3.033.869,00 pesos m/cte., como valor resultante de reliquidar los factores solicitados, para el periodo comprendido entre



el 24 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022 (...) **2.** No se reconocieran intereses ni indexación, o cualquier otro gasto que se pretenda por el convocante, es decir, solo se reconoce el capital conforme a la liquidación realizada por la entidad. **3.** Se debe tener en cuenta la prescripción trienal de las sumas indicadas, conforme la certificación aludida. **4. Pago:** Los valores antes señalados serán cancelados dentro de los 60 días siguientes a aquel en el que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa apruebe la conciliación, no generando intereses tampoco en este lapso. **5. Forma de pago:** El pago se realizará, mediante consignación en la cuenta que el funcionario tenga reportada en la entidad para el pago de nómina, salvo indicación en contrario del solicitante, comunicada a la entidad al momento de elevar la petición de pago, o en todo caso, antes de efectuarse el pago respectivo". Frente a la anterior postura y luego de efectuar el traslado formal, junto con la remisión mediante comunicación electrónica de la copia digital de la certificación emitida por el Comité de Conciliación, el apoderado de los convocantes señaló lo siguiente: "Absolutamente de acuerdo con lo manifestado por la doctora Consuelo, apoderada de la Superintendencia, máxime que en todos los casos cada uno de los convocantes en su momento cuando hicieron la reclamación respectiva aceptaron la certificación que expidió la Superintendencia de Sociedades, por tanto absolutamente de acuerdo".

El anterior acuerdo fue avalado por la Procuradora 195 Judicial I para Asuntos Administrativos, tras considerar que, el mismo reúne "todos los requisitos de ley, a saber: **(i)** el eventual **medio de control** que se ha podido llegar a presentar **no ha caducado** (artículo 61 de la ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 de la ley 446 de 1998); **(ii)** el acuerdo conciliatorio **no menoscaba derechos irrenunciables del convocante y versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes** (artículo 59 de la ley 23 de 1991, y artículo 70 de la ley 446 de 1998); **(iii)** las **partes** se encuentran **debidamente representadas** y sus representantes tienen capacidad para conciliar, lo que para el caso de la mandataria de la convocada está condicionado a los parámetros señalados por su Comité de Conciliación y Defensa Judicial; **(iv)** los términos del acuerdo se enmarcan integralmente en la propuesta aprobada y formulada por el Comité de Conciliación de la entidad, y (v) los **hechos** que sirven de fundamento se encuentran **debidamente acreditados** a través de las pruebas que obran en el expediente y que justifican el acuerdo; a saber: **RESPECTO A NINI SAYURY CRUZ TOLOSA:** 1) petición radicada por la entidad con el consecutivo interno No. 2022-01- 455574 de 23 de mayo de 2022, por medio de la cual la convocante solicitó a la entidad convocada el reconocimiento y pago de los conceptos objeto del

acuerdo; 2) respuesta suministrada a la reclamación administrativa mediante radicado No. 2022-01-490849 de 2 de junio de 2022, en la cual se accede a la reliquidación solicitada en el marco de los parámetros generales adoptados por el Comité de Conciliación de la entidad en sesión del 2 de junio de 2015; 3) certificación 2022-01-490275 consecutivo 510-001757 de 2 de junio de 2022 por la Coordinación del Grupo de administración de talento humano de la entidad convocada en la cual se constata la liquidación de los conceptos a conciliar, los lapsos de su causación y montos; 4) comunicación calendada el 13 de junio de 2022 con consecutivo No. 2022-01-527588, mediante la cual la convocante manifiesta su aceptación ante la propuesta conciliatoria de la Superintendencia; 5) memorial mediante el cual la convocante confirió poder en favor de Gustavo Ernesto Bernal Forero para actuar en su nombre y representación, con otorgamiento de la facultad expresa para conciliar, así como mensaje de otorgamiento de poder al tenor de lo previsto en el artículo 5 de la ley 2213 de 2022 incorporada a la subsanación, en cuya virtud celebra el presente acuerdo (...)

Adicionalmente, obran los siguientes soportes comunes a los tres convocantes, incorporados por la vocera de la entidad pública convocada: 1) poder conferido a la profesional del derecho que actúa representación de la entidad pública convocada, con concesión de la facultad expresa para conciliar al amparo de la cual celebra el presente acuerdo, así como las constancias que dan cuenta sobre la calidad y facultades que ostenta la servidora otorgante; 2) certificaciones expedidas el 9 de agosto de 2022 por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Sociedades frente a la solicitud de conciliación, en la cual constan los términos, conceptos y cuantía del acuerdo".

**Finalmente, (vi) en criterio de esta Agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta en sí mismo considerado no es violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones:** El artículo 12 del decreto 1695 de 1997 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se suprimió la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades CORPORANÓNIMAS, radicó en cabeza de las superintendencias afiliadas a dicha corporación el deber de continuar pagando los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y en el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas (...)"

#### IV. CONSIDERACIONES

Esta sede judicial es competente para pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio antes citado, para lo cual debe recordarse que desde la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, la conciliación se extendió hasta el campo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo procedente sobre aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico que se encuentren en el ámbito de su competencia, susceptibles de ser enjuiciados con ocasión de las acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Contractuales y de Reparación Directa. Lo anterior, por estricto mandamiento del artículo 59 de la mencionada Ley 23 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

**“ARTICULO 59.** (Modificado por el Art. 70, Ley 446 de 1998). Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.”

En desarrollo de las normas referenciadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”, obra que contiene la ordenación que rige el procedimiento conciliatorio extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Así pues, ha de observarse que la solicitud de conciliación haya reunido los requisitos establecidos por el artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, que son los siguientes:

- “a) La designación del funcionario a quien se dirige;
- b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;
- c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
- d) Las pretensiones que formula el convocante;

- e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;
  - f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;
  - g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;
  - h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
  - i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;
  - j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.
  - k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;
  - l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes;
- (...)"

De la misma manera, el Decreto 1365 del 27 de junio de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", establece:

**"Artículo 4. Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.** En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el párrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto".

Igualmente, de conformidad con el marco jurídico vigente, para efectos de impartir la aprobación prevista en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, el juez de conocimiento debe verificar que el acuerdo conciliatorio:

- Verse sobre un asunto conciliable.
- No afecte derechos fundamentales, ni atente contra el ordenamiento jurídico.
- No sea lesivo para el patrimonio público.

- No haya tenido como objeto asuntos en los cuales la acción a precaver se encuentre caducada.

En ese orden, procede el Despacho a referirse el marco normativo que regula la materia, así como a la verificación del cumplimiento de los antedichos requisitos:

En el caso objeto de análisis tenemos que figuran como **SUJETOS**, por la parte **ACTIVA: NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**, quien actúa a través de su apoderado judicial, mediante poder debidamente otorgado, y por la parte **PASIVA** la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, quien igualmente actúa a través de apoderado judicial, mediante poder debidamente otorgado.

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema objeto de conciliación se considera pertinente citar el Acuerdo 040 de 13 de noviembre de 1991, expedido por la Junta Directiva de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades y cuyo artículo 58 en relación con la reserva Especial de Ahorro preceptúa lo siguiente:

**“ARTÍCULO 58. Contribución del Fondo de Empleados. RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO.** Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de Empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas. Entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%) previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley...”

Con respecto al órgano competente para el pago de prestaciones a favor de los empleados de las Superintendencias, es fundamental la regulación dispuesta por el artículo 12 del Decreto 1695 de 1997, que señala:

**“ARTÍCULO 12. PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS.** El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo.”

Establecido lo anterior, se observa que:

- a) La solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la convocante cumple con los requisitos señalados por el Decreto 1716 de 2009.
- b) El asunto aquí debatido es perfectamente conciliable, por cuanto lo que fue objeto de arreglo entre las partes involucradas, hace alusión al reconocimiento y pago de factores salariales, a favor de la señora **NINI SAYURY CRUZ**.
- c) El asunto conciliado versa sobre un derecho de contenido particular y económico, lo cual es de libre disposición por los acordantes, sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno o vaya contra la ley o la jurisprudencia, toda vez que proviene de una obligación contraída por las partes conforme a la normatividad existente en materia laboral.
- d) El acuerdo celebrado no resulta lesivo para el patrimonio público, por cuanto la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** está reconociendo a la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA** el derecho que le asiste a percibir lo correspondiente a **PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, HORAS EXTRAS y VIÁTICOS**, que se causaron a su favor en relación con el factor de **RESERVA ESPECIAL DE AHORRO**. Sobre este particular, debe mencionarse que el derecho objeto de la presente conciliación fue estudiado por el Comité de Conciliación de la mencionada entidad, como consta en la respectiva certificación, y en la cual dicho comité recomendó y autorizó, de forma expresa, conciliar la presente controversia,

de conformidad con la fórmula propuesta en pleno. Así mismo, resulta pertinente destacar que de la estimación de los montos adeudados a la convocada obra prueba correspondiente a las liquidaciones allegadas al expediente contenida en certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Administración de Personal de la entidad, por lo que queda claro para el Despacho que el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes se propuso dentro de un marco de razonabilidad y austeridad por parte de la entidad, siendo entonces dable concluir que el mentado acuerdo no es lesivo, como se indicó en precedencia, para el patrimonio público.

- e) Finalmente, en lo que respecta a la caducidad de la acción, esta sede judicial considera que el estudio de dicho fenómeno no procede para efectos de la aprobación del acuerdo conciliatorio, como quiera que el asunto materia de acuerdo es la liquidación de unos factores salariales (teniendo en cuenta la Reserva Especial del Ahorro; razón por la cual, al tratarse de reconocimientos periódicos, no pueden ser susceptibles de la ocurrencia de caducidad. Lo anterior, sin perjuicio de establecer que aún no ha culminado el termino de cuatro meses relacionados con la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a este asunto.

En ese orden y al observar esta instancia judicial que el asunto conciliado cumple con los requisitos de ley y no afecta derechos fundamentales, ni atenta contra el ordenamiento jurídico, no es lesivo para el patrimonio público y respecto del mismo no opera el fenómeno jurídico de la caducidad; este Despacho, teniendo en cuenta el cumplimiento a cabalidad con las formalidades previstas en la Ley 640 de 2001.

## RESUELVE

**PRIMERO: PRIMERO: CONOCER** únicamente la solicitud de aprobación de la Conciliación Extrajudicial surtida entre señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, conforme lo expuesto.

**SEGUNDO: APROBAR** la Conciliación Extrajudicial contenida en el Acta con Radicación E-2022-401003 (169-21 del 18 de julio de 2022), celebrada el 29 de agosto de 2022, ante la **PROCURADURÍA 195 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**; entre la señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**; avalada por la **PROCURADURÍA 195**

**JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, por la suma de **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$3.033.869),.**

**TERCERO:** Por Secretaría expídase a la convocante, señora **NINI SAYURY CRUZ TOLOSA**, copia de la presente providencia, del acta de conciliación y de la liquidación aportada por la entidad convocante, en los términos del artículo 114 del Código General del Proceso y comuníquese a la parte convocada.

**CUARTO:** Ordenar a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, que someta a reparto de manera individual las solicitudes de conciliación extrajudicial de los señores **DANIEL HERNANDO BARRAGÁN CASTRO** y **ÁLVARO ALEXANDER YEPES MEDINA**.

**QUINTO:** Por Secretaría, déjense las constancias respectivas, librense los oficios correspondientes y dese cumplimiento, a la mayor brevedad, a lo aquí resuelto.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ENRIQUE ARCOS ALVEAR**  
**JUEZ**

MV

Apoderado parte convocante	<b><a href="mailto:gustavo21bernal@hotmail.com">gustavo21bernal@hotmail.com</a></b>
Entidad convocada	<b><a href="mailto:notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co">notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co</a></b>
Ministerio Público	<b><a href="mailto:procjudadm191@procuraduria.gov.co">procjudadm191@procuraduria.gov.co</a></b>



